

# América Latina en el Siglo XX: Del Liberalismo al Socialismo

Alberto Prieto Rozos

July 5, 2013

La hegemonía del liberalismo en América Latina se alcanzó mediante la toma del poder –en los distintos Estados del subcontinente– por la burguesía agro-minero-exportadora, asociada con los intereses imperialistas de Inglaterra. Esa conjunción de fuerzas aniquiló a la burguesía nacional del Paraguay –en la horrenda Guerra de la Triple Alianza (1865-70)–, y en 1891 derrotó a la de Chile, en una conflagración interna que puso fin al intento cuasi nacionalista encabezado por José Manuel Balmaceda. Hubo que esperar el inicio del siglo XX, para que la ascendente burguesía nacional –exclusivamente vinculada con el mercado interno–, triunfara. Ello sucedió en la República Oriental del Uruguay a partir de 1903, cuando José Batlle Ordoñez ocupó la presidencia y llevó a cabo una serie de importantes reformas, cuya esencia radicaba en establecer el proteccionismo e impulsar el capitalismo de Estado. Dichos procedimientos caracterizaban la correlación de fuerzas en ese país; el referido grupo social había tomado el poder, pero no tenía la capacidad –por sí mismo– de desarrollar los sectores económicos no manufactureros ni la infraestructura. Después tuvo lugar la trascendente Revolución Mexicana, que decapitó a la burguesía agro-exportadora “porfirista” y emitió la Constitución democrático-burguesa de 1917. En ella se diseñaron proyecciones nacionalistas y se beneficiaba a la burguesía nacional, así como al campesinado humilde. Éste había sido despojado de sus ejidos o tierras comunales durante la elitista Reforma Liberal realizada en la era posterior a Benito Juárez; dicho extraordinario político había luchado toda su vida para transformar la vieja sociedad feudo-clerical, por medio de la multiplicación de las pequeñas y medianas propiedades rurales.

El imperialismo inglés fue hegemónico en América Latina hasta finales del siglo XIX, por la importancia o magnitud de su comercio e inversiones en la región. Aunque la creciente producción industrial de Estados Unidos rivalizaba ya con la británica, ese país norteamericano carecía entonces de capitales ociosos para enviar al extranjero. Las insaciables necesidades de su gigantesco mercado interno atraían incluso enormes cantidades de dinero anglo-francés; con éste se promovía la construcción de las extensas líneas ferroviarias hacia el lejano Oeste, y se implantaban nuevas industrias que nutrían su desarrollo económico. Tan grandes resultaban esos requerimientos financieros, que el gobierno en Washington prohibió a los bancos federales tener sucursales en el exterior. Por ello

Estados Unidos recurrió a procedimientos militares, para implantar la superioridad de sus intereses en América Latina. Sucedió así en Cuba, territorio que representaba su principal mercado foráneo y desde el cual podrían controlar el Caribe. Eso tuvo lugar a partir de 1898 cuando tras la ocupación militar de esa estratégica Isla, fundó la United Fruit Company y forzó a Inglaterra a firmar el tratado Hay-Pouncefote. Éste derogaba el semi-centenario tratado Clayton-Bulwer, y autorizaba a los norteamericanos a construir su propio y exclusivo canal por Panamá. Por eso la política estadounidense se lanzó en contra del presidente de Nicaragua, José Santos Zelaya, quien soñaba con una vía interoceánica financiada por Japón y Alemania; este rival país europeo por aquella época desarrollaba gran actividad en Guatemala, El Salvador y Haití. Pero una vez impuesto su dominio sobre Cuba, los Estados Unidos se convirtieron en potencia hegemónica del Caribe. Más tarde, a causa de la Primera Guerra Mundial y del Tratado de Versalles, la importancia de esta nación se multiplicó; en América Latina la casi totalidad de las inversiones alemanas y francesas, así como una parte de las inglesas, pasaron a ser estadounidenses.

Sin embargo la principal consecuencia de la gran conflagración bélica mundial, fue la Revolución Socialista de Octubre en el antiguo imperio de los zares, donde al poco tiempo se organizó la Internacional Comunista o Komintern. Esta organización fungió como el partido de los revolucionarios contra el mundo burgués, incluso el de América Latina. Dicha Tercera Internacional, que en sucesivos congresos emitió lineamientos obligatorios para sus militantes, estableció en el sexto de ellos –celebrado en Moscú en 1928- una orientación novedosa para luchar por la revolución. Acorde con ella, los partidos deberían proletarizar sus dirigencias, que luego impulsarían los enfrentamientos de clase contra la burguesía sin buscar alianzas políticas con otros grupos sociales, e instituirían “soviets” como órganos del nuevo poder estatal socialista.

La gigantesca crisis cíclica del capitalismo entre 1929 y 1933, significó el fin de la supremacía del liberalismo económico en los países imperialistas. Esta realidad se manifestó en Inglaterra, cuando en 1932 ese país convocó a celebrar en Ottawa una Conferencia de la Mancomunidad Británica, en la cual se estableció el proteccionismo a escala de la Commonwealth. Al año en Estados Unidos se impuso la concepción keynesiana del New Deal (Nuevo Trato), cuyas expresiones hacia América Latina fueron la llamada “política del buen vecino” y la creación de un banco gubernamental –llamado Eximbank- para el comercio exterior. Y a partir de 1934 Alemania desarrolló su “Ostpolitik” hacia la Unión Soviética y Turquía, cuya contraparte latinoamericana se llevaba a cabo con la práctica de una moneda nominal llamada Askimark; ella establecía acuerdos interestatales que implementaban equilibrados intercambios mercantiles, mutuamente ventajosos, de materias primas a cambio de medios de producción.

En ese nuevo contexto internacional, la Komintern imprimió un giro total a su política durante su séptimo congreso en 1935 en Moscú; en él se dispuso el abandono de la lucha por la revolución, que fue sustituida por el anhelo de conformar Frentes Populares. Estos deberían instituirse en cada país, mediante la alianza de los Partidos Comunistas con los sectores progresistas de la burguesía, con el propósito de frenar el conservadurismo y la reacción en aras de mejorar

la sociedad.

En América Latina la crisis de 1929 al 33 encontró respuestas nacionalistas y revolucionarias. Éstas últimas agrupaban a sus partícipes en dos concepciones distintas; los comunistas, según lo establecido en su congreso internacional de 1928, luchaban sin aliados contra la burguesía con el propósito de implantar “soviets” e instituir el socialismo. Fue de ese modo en El Salvador de Farabundo Martí y en Chile, en 1932, así como en Cuba, en 1933. Sin embargo, al mismo tiempo en esos países estaban los partidarios de la segunda concepción, que defendían la revolución sin “poder soviético”; Marmaduke Grove proclamaba la “República Socialista” chilena, mientras Antonio Guiteras pretendía por sucesivas etapas acercarse al socialismo cubano. Esta diferencia fue asimismo el motivo de la discordia entre Farabundo y Sandino; este último deseaba revolucionar la sociedad mediante la conformación de cooperativas de obreros y campesinos. Pero tras alcanzar —en 1933— la victoria contra las tropas de ocupación estadounidenses, el heroico guerrillero nicaragüense aceptó desbandar su Ejército Defensor de la Soberanía Nacional, sin conformar una organización partidista que luchase por la revolución.

Así en 1935, debido a la desunión y los errores, los procesos revolucionarios en América Latina habían sido derrotados.

Las respuestas nacionalistas a las consecuencias de la crisis de 1929, se iniciaron en Brasil tras haber realizado la oligarquía liberal un colosal fraude electoral. Entonces Getulio Vargas, candidato burlado y gobernador de Río Grande do Sul, se alió a fines de 1930 —en una poderosa insurrección— con los prestigiosos integrantes del acéfalo “tenentismo”; Luís Carlos Prestes, carismático dirigente de estos ex-oficiales rebeldes, había abandonado dicho movimiento para incorporarse al comunista. La sublevación, que triunfó en un mes, permitió a los victoriosos militares conformar Legiones Revolucionarias, las cuales aterrorizaron a la oligarquía agro-exportadora cafetalera. Ésta promovió entonces en Sao Paulo un alzamiento del ejército que ocasionó una guerra civil de tres meses; en septiembre de 1932 se rindieron. Pero Getulio logró un entendimiento con los vencidos y convocó a una Constituyente, que emitió en 1934 un texto nacionalista y semi-corporativo. El nuevo régimen fue rechazado por Prestes y su novedosa Alianza Nacional Libertadora —inspirada por el Partido Comunista Brasileño—, cuya rebelión de 1935 fue aplastada. El inestable constitucionalismo finalmente fue sepultado al instituir Vargas en 1937 el Estado Novo. El presidente se dotó así de poderes autocráticos en un sistema centralista y por completo corporativo, que impulsó —con las inversiones inglesas expropiadas— un poderoso capitalismo de Estado. Entonces la Acción Integralista, movimiento adepto al fascismo —encabezado por Plinio Salgado—, se alzó en armas en 1938 pero también fue derrotado.

Al iniciarse la Segunda Guerra Mundial aunque Alemania era importantísimo socio comercial del Brasil, Vargas dio un extraordinario giro a su política internacional; declaró la guerra a las potencias del eje nazi-fascista, envió un ejército de veinticinco mil soldados a combatir en Italia, y tras la disolución en Moscú de la Komintern en 1943, permitió la convergencia con el legalizado PCB. Éste, encabezado por Prestes, promovía una alianza con el Partido Trabalhista

—creado por Vargas— para impulsar el “Queremismo” (apocopación de “Queremos a Getulio”), cuyas principales consignas eran unificar a los sindicatos y convocar a una Constituyente. Pero temerosa de las nuevas proyecciones del “varguismo”, la vieja oligarquía agro-exportadora aliada con los emergentes monopolios industriales criollos, promovió en octubre de 1945 un golpe de Estado militar. Después el nuevo presidente del Brasil ilegalizó al Partido Comunista, desató una represión anti-obrera, ofreció a Río de Janeiro para la firma del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca —de carácter militar—, y abrió las puertas del país a las inversiones del capital extranjero, mayormente estadounidense. Un lustro de gobierno antidemocrático fue suficiente para galvanizar la opinión pública detrás de Vargas, quien ocupó en 1951 la presidencia con dos tercios de los votos emitidos. Entonces se limitó el envío al exterior de las ganancias de las empresas foráneas, se constituyó el Banco Nacional de Desarrollo Económico, se creó Petrobras o monopolio estatal del petróleo, se impulsó la producción de acero, se aumentaron los salarios, se concibió una Reforma Agraria, se proyectó Electrobras o monopolio estatal de la energía. Esta política disgustó a los monopolios criollos e irritó a Estados Unidos, que redujo a la cuarta parte sus tradicionales compras de café brasileño. En ese contexto Vargas no supo qué hacer. Escribió un vibrante documento contra sus enemigos y en agosto de 1954 se suicidó.

En México la crisis cíclica iniciada en 1929 golpeó con rudeza la economía, lo que provocó el descontento popular. En dicha situación, con el respaldo de la burguesía nacional y de la pequeña burguesía urbana —que impulsaban un entendimiento con el proletariado—, el general Lázaro Cárdenas ganó las elecciones para el sexenio presidencial que se iniciaba en 1934. De inmediato se legalizó la actividad de los comunistas, se unificó a los asalariados en la Central de Trabajadores Mexicanos, se aumentaron los salarios, la Reforma Agraria entregó dieciocho millones de hectáreas —sobre todo en propiedad colectiva a los ejidos—, se organizó la Confederación Nacional Campesina, se auspiciaron las producciones industriales y se controlaron las importaciones, se impulsó el Capitalismo de Estado y su actividad inversionista, se nacionalizaron los ferrocarriles y el petróleo. Esto le granjeó a México en 1938 el boicot comercial y diplomático de Estados Unidos e Inglaterra. Ello contrastaba con el apoyo que el presidente Cárdenas brindaba a la República Española, su oposición a la anexión de Austria por Hitler y a la invasión de Etiopía por Mussolini. Mientras, al interior del país la política de alianzas propugnada por la burguesía nacional se reflejó en la metamorfosis del gubernamental Partido Nacional Revolucionario; éste fue transformado en Partido de la Revolución Mexicana y se estructuró de forma corporativa en cuatro sectores: obreros, campesinos, militares y burgueses, todos bajo el liderazgo de los industriales. Después durante la Segunda Guerra Mundial —y años siguientes— las crecientes producciones autóctonas de bienes de consumo saturaron la demanda solvente en el mercado interno. A partir de entonces los sectores más débiles de la burguesía nacional se pauperizaron, en tanto los poderosos se transformaban en monopolios criollos. Éstos impulsaron en 1946 la transformación del PRM en el moderado Partido Revolucionario Institucional, que en su momento buscó una alianza con las transnacionales.

En Argentina, cuando finalizaba la Segunda Guerra Mundial, se comprendió la posibilidad de una crisis económica por el regreso de las manufacturas foráneas. Por ello, militares nacionalistas coordinados por el coronel Juan Domingo Perón realizaron en junio de 1943 un golpe de Estado. Entonces se congelaron los alquileres urbanos y rurales, se establecieron aranceles proteccionistas, se instituyó un Banco de Crédito Industrial. También se declaró la guerra contra Alemania y se incautaron los quinientos millones de dólares en inversiones de ese país, que fortalecieron el capitalismo de Estado. Pero la política social de Perón entró en contradicción con los criterios de los demás integrantes del gobierno militar, quienes lo encarcelaron. En ese momento, los asalariados beneficiados por su gestión –conocidos como “descamisados”- se lanzaron a la calles y forzaron su liberación. Tras ser electo a la presidencia en 1946, el ahora general Perón fundó su Partido Unido de la Revolución Nacional que pronto devino en “Justicialista”, al moderarse y excluir la Reforma Agraria. Después se eliminaron las inversiones extranjeras –casi todas inglesas-; se nacionalizó el Banco Central así como los ferrocarriles, teléfonos, gas, electricidad, puertos, transportes urbanos, seguros y reaseguros. También se impulsó la marina mercante nacional, se constituyeron las Aerolíneas Argentinas, se creó el Instituto Argentino de Promoción e Intercambio que orientaba el comercio exterior y controlaba las divisas. La Constitución de 1949 estableció la función social de la propiedad y el capital, estatizó los servicios públicos así como las fuentes de energía y los yacimientos minerales. Dos años más tarde se concluyó el Primer Plan de Desarrollo Económico y culminó el proceso de sustituir todos los bienes de consumo necesitados en el mercado interno.

Al iniciarse la “Guerra Fría”, Perón inventó la llamada “Tercera Posición”, pues pretendía alejarse de la hegemonía de Estados Unidos. Éstos en revancha, lo excluyeron de las compras de alimentos realizadas por el Plan Marshall, lo cual provocó el desplome de las exportaciones agropecuarias argentinas. Se desvaneció así la posibilidad de financiar con recursos propios la proyectada industria pesada; el país carecía de divisas, faltaba el petróleo, decaían las ventas al exterior, no había créditos internacionales, se incrementaba la corrupción, florecía el peculado. Entonces, en 1953 se firmó con la Unión Soviética un importante acuerdo mercantil con amplios créditos, y el intercambio con esa nación llegó a absorber el 9 por ciento del comercio externo argentino. A la vez, el reelecto presidente se apoyó crecientemente en la pequeña y mediana burguesías, así como en sectores del proletariado; trató mediante una política populista, de impedir que los incipientes monopolios criollos –el 20 por ciento de la producción- arruinaran a los pequeños y medianos productores y explotaran más intensamente a sus asalariados. Sin embargo la lucha social y de clases se incrementaba pues nadie estaba satisfecho; la izquierda justicialista pedía que el régimen se radicalizara mientras la derecha exigía su moderación. Entre la perspectiva de movilizar a las masas o doblegarse ante la oligarquía y el imperialismo, Perón no escogió. Era nacionalista, pero no deseaba que se realizara un proceso revolucionario, lo cual sería la consecuencia de armar a los humildes y desposeídos. Y esa era la única vía para vencer los reaccionarios levantamientos militares en gestación. Por ello a finales de 1955 optó por el exilio. Se agotó

así la política nacionalista –tanto en Argentina y Brasil, como en México-, inspirada por la burguesía nacional; sus sectores más débiles se pauperizaban, mientras los poderosos se convertían en monopolistas y anhelaban asociarse con las empresas imperialistas.

En América Latina, como consecuencia de los acuerdos del VII Congreso de la Tercera Internacional, los Partidos Comunistas de la región buscaron asociarse con los estratos burgueses susceptibles de impulsar transformaciones democráticas. Así, en Cuba, dos prestigiosos intelectuales miembros de dicha militancia integraron –como ministros sin cartera- el gabinete presidencial de Fulgencio Batista. Mientras en Chile, la mencionada y novedosa orientación de los marxistas-leninistas propició el surgimiento en 1937 de un Frente Popular. El mismo estaba integrado por los partidos comunista, socialista –recién fundado por Marmaduke Grove-, y el renovado Radical, todos estructurados alrededor de la figura de Pedro Aguirre Cerdá. Éste, una vez electo a la presidencia –con Salvador Allende como Ministro de Salud-, multiplicó la asistencia social, impulsó la industrialización, desarrolló el capitalismo de Estado sobre todo en las ramas del petróleo, metalurgia y electricidad. En el agro eliminó las reminiscencias semi-feudales de explotación. Pero inesperadamente en noviembre de 1941 el radical Aguirre Cerdá falleció, el Frente Popular se deshizo y un moderado equipo gubernamental lo sustituyó.

En Costa Rica, la influencia comunista fue trascendente para la supervivencia del progresista gobierno socialcristiano de Rafael Calderón Guardia, auspiciado por la burguesía nacional. Al presidente lo atacaban todos los conservadores –dentro y fuera de su Partido Republicano Nacional-, debido a que había regulado los precios, impulsado obras públicas, modernizado el sistema fiscal impositivo, organizado el crédito rural para pequeños y medianos agricultores, facilitado habitaciones a las humildes masas ciudadinas, estructurado la Seguridad Social para dar garantías a los trabajadores ante problemas de salud y vejez o desempleo. Entonces los comunistas metamorfosearon su partido en Vanguardia Popular; tenían el objetivo de no resaltar las diferencias filosófico-ideológicas entre cristianos y marxistas, cuando ambos se aliaron en una organización denominada Bloque de la Victoria. Éste logró una reforma constitucional que establecía el control estatal sobre la economía, el derecho de todos al trabajo, salarios mínimos, la sindicalización generalizada. También autorizaba el surgimiento de la propiedad cooperativa y aprobaba una ley que permitía expropiar –mediante indemnización- tierras incultas, para luego distribuirlas entre quienes no tuvieran ninguna. En las elecciones de 1944 triunfó el candidato del Bloque de la Victoria. Ese gobierno fundó la Tesorería Nacional y una Junta Central de Comercio, fijó impuestos sobre la Renta y auspició los créditos rurales para pequeños propietarios, impulsó las cooperativas agrícolas y artesanales, construyó viviendas para obreros y repartió tierras. Después, para los comicios de 1948 la organización política gubernamental anunció el retorno de la candidatura presidencial de Calderón Guardia, con la promesa de realizar una Reforma Agraria. Pero en febrero el proceso electoral no ofreció un claro triunfo para ningún bando, lo cual estimuló a los conservadores a sublevarse en las montañas del sur, mientras las fuerzas armadas caían en el inmovilismo.

En dichas circunstancias José Figueres –dirigente del Partido Socialdemócrata– organizó el Ejército de Liberación Nacional con restos de la Legión del Caribe y ocupó Puerto Limón. Por su parte Vanguardia Popular llamó a crear milicias armadas en la capital para defender el gobierno. Éste a su vez, pidió ayuda al tirano Somoza, quien ocupó con sus fuerzas una zona dentro del territorio costarricense. Pero pronto Figueres y los comunistas comprendieron que para ambos el peligro mayor residía en los conservadores y en Somoza. Por ello las dos agrupaciones pactaron; los milicianos entregaron sus armas al ELN y lo respaldaron en su enfrentamiento contra los enemigos comunes a cambio de que se respetaran los derechos de los trabajadores y se profundizaran las reformas. Entonces Figueres instituyó una Junta de Gobierno que logró la retirada de Somoza y la rendición de los conservadores insurrectos; después disolvió las fuerzas armadas tradicionales, otorgó el derecho al voto a las mujeres, negoció con la UFCO mayores impuestos a sus ganancias a cambio de no realizar la reforma agraria, nacionalizó la banca y prohibió el Partido Vanguardia Popular. Empezaba la Segunda República.

Guatemala desde la crisis de 1929 sufría el terror impuesto por el general Jorge Ubico, aupado a la presidencia por la burguesía agro-exportadora de café. Pero en 1942 surgieron las primeras organizaciones estudiantiles, que desde ese momento encabezaron la lucha antigubernamental. Luego, en junio de 1944, los universitarios engendraron un cese laboral que puso fin a su gobierno, aunque otro general se empeñó en prolongar el represivo régimen. Entonces otra huelga –el 16 de octubre–, acompañada a los cuatro días de una sublevación militar encabezada por el capitán Jacobo Árbenz, puso fin a la tiranía. Presidida por este joven oficial se creó una Junta Revolucionaria que pasó a retiro a todos los generales y abolió dicho rango, tras lo cual se celebraron elecciones presidenciales y para una Constituyente. Ésta, en marzo de 1945 derogó el texto liberal en vigor y emitió otro que: otorgaba el voto a todos los hombres y a las pocas mujeres alfabetizadas que hubiere, planteaba la libertad de prensa, expresión y de partidos políticos, endilgaba ingenuamente una función social a la propiedad privada, permitía las expropiaciones en beneficio público, prohibía los latifundios. Pero el recién electo presidente Juan José Arévalo nunca propuso al Congreso ley de reforma agraria alguna ni reconoció a la Confederación Nacional Campesina. En cambio tuvo éxito en la consolidación de las “fincas nacionales” o variante agrícola del capitalismo de Estado; eran plantaciones expropiadas a los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. También se empeñó en impulsar el fortalecimiento de la burguesía industrial para lo cual instituyó el Banco Nacional y un Instituto de Fomento a la Producción; éstos incentivaban el desarrollo de los negocios privados comprometidos con el empleo de recursos guatemaltecos, en el proceso de diversificar la economía. Durante su sexenio el presidente empleó la tercera parte de los gastos en la construcción de hospitales, viviendas, escuelas; aprobó un código de trabajo que incluía la jornada de ocho horas, derecho a la huelga y a la sindicalización, descanso retribuido, vacaciones pagadas, indemnización por despido injustificado, contratos obrero-patronales obligatorios, salario mínimo, igual paga por semejante trabajo; creó el Instituto de Seguro Social y aceptó el surgimiento de la Central de Trabajadores de

Guatemala. Sin embargo Arévalo tuvo dificultades con los Estados Unidos; los irritó por respaldar a los obreros de la UFCO en sus reclamaciones laborales, así como por sus empeños en lograr que la Electric Bond and Share y la International Railways of Central América disminuyeran sus tarifas. También por su Decreto 649, que imponía el control nacional sobre las concesiones petrolíferas otorgadas previamente a empresas estadounidenses. Asimismo tuvo fricciones con el gobierno en Washington por su auspicio a la ya mencionada Legión del Caribe. Esta fuerza militar estaba compuesta por revolucionarios de Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, República Dominicana y Cuba, en cuya región oriental se entrenaban para luchar contra las tiranías de Somoza y Trujillo.

Jacobo Árbenz, apoyado por la CGT, ganó con dos tercios de los votos las elecciones presidenciales de 1950. De inmediato permitió la formación del Partido Comunista –que pronto devino en Guatemalteco del Trabajo–, rechazó la exigencia de la Organización de Estados Americanos de enviar tropas a la Guerra de Corea, empezó a erigir la hidroeléctrica de Jurún-Marinalá con el propósito de romper el monopolio de la Electric Bond and Share, comenzó una carretera del Atlántico al Pacífico para quebrar el dominio de la IRCA sobre el transporte, inauguró los trabajos para habilitar la bahía de Santo Tomás que desafiaría las instalaciones de la UFCO en Puerto Barrios. Y el 17 de julio de 1952 emitió su Decreto 900, que disponía la expropiación –mediante el pago en bonos a largo plazo– de todas las tierras no cultivadas, así como las arrendadas por los terratenientes bajo principios no capitalistas. Todos dichos predios así como los de propiedad estatal se distribuirían entre los campesinos sin tierra, quienes serían financiados por un nuevo Banco Agrario Nacional. De esta manera la transformación de la propiedad rural se convirtió en el pilar de lo que en Guatemala se conocía como la Revolución de Octubre. Desde entonces se expropiaron a la UFCO decenas de miles de hectáreas, se inauguró el puerto de Santo Tomás, se avanzó en la construcción de la hidroeléctrica; además cuando en la Electric Bond y en la IRCA se produjeron graves conflictos laborales, Árbenz dispuso la intervención o gestión gubernamental de ambos consorcios. La réplica del imperialismo y la reacción no se hizo esperar; sublevaciones militares derechistas, propósitos aviesos de Somoza y del conservador gobierno de Honduras, y sobre todo una conjura de la Central Intelligence Agency (CIA), que preparaba con exiliados guatemaltecos una invasión mercenaria. Estados Unidos además, en la X Conferencia Interamericana de la OEA, logró –con los votos adversos de Argentina y México– una resolución anticomunista que en realidad condenaba a muerte al proceso revolucionario. El proyecto imperialista se ejecutó el 18 de junio de 1954 cuando la tropa contrarrevolucionaria penetró en Guatemala. Una semana después los aviones suministrados por la CIA a los mercenarios bombardearon la capital y otras ciudades. Entonces Árbenz deseó armar al pueblo pero gran parte de la oficialidad se opuso y además exigió que los elementos más revolucionarios fuesen expulsados del gobierno. Se pagaba así el trágico precio de no haber depurado –en su momento– las fuerzas armadas, ni haber eliminado la opresión cultural sufrida por las diversas tribus mayas, las cuales constituían en el país la mayoría de la heterogénea población. En esas aciagas circunstancias, el 29 de junio de 1954, el presidente no encontró más

solución que renunciar a su cargo y marchar al exilio. Después sobre Guatemala se desencadenó una desenfrenada represión.

En Bolivia la crisis cíclica de 1929 afectó mayormente a quienes vivían en las ciudades o estaban vinculados con las actividades mineras, de las cuales la petrolífera tenía creciente importancia. Fue por diferendos fronterizos relacionados con su extracción y transporte que estalló la cruel Guerra del Chaco. Aunque ésta había sido atizada por contradicciones entre compañías de Estados Unidos e Inglaterra las consecuencias recayeron sobre los latinoamericanos; los combates dejaron un saldo de ciento veinte mil muertos, de ellos más de la mitad bolivianos. Durante la conflagración muchos jóvenes de extracción pequeño-burguesa recibieron formación como oficiales y engendraron fuertes sentimientos nacionalistas; esto los indujo a inmiscuirse en la vida política mediante la creación de logias militares. La más influyente de ellas, encabezada por los coroneles Germán Busch y David Toro, ocupó el poder en mayo de 1936 a raíz de una huelga general convocada por organizaciones proletarias clandestinas. Entonces se dio por terminada la República Liberal, se constituyó el Partido Socialista de Gobierno —formado por civiles y militares—, se decretaron insólitas medidas a favor de los obreros, lo cual posibilitó la creación de la Confederación Sindical de Trabajadores de Bolivia. Y el 13 de marzo de 1937 se emitió la “Resolución Suprema” que nacionalizaba treinta y un pozos de petróleo, dos destilerías y siete millones de hectáreas, perteneciente todo a la estadounidense Standard Oil Co. Después una Constituyente emitió en 1938 un texto que: proclamaba al Estado dueño de las riquezas naturales, aludía a la función social de la propiedad, diseñaba un Código de Trabajo, reconocía el derecho del campesinado aborigen a sus tradicionales tierras comunales. Más tarde se conformó un Banco Minero encargado de proteger y fomentar los pequeños yacimientos, en cuya dirección se colocó a un joven civil llamado Víctor Paz Estensoro. Pero la inexplicable y súbita muerte de Busch —presidente en funciones—, quien acababa de decretar en 1939 la disolución del Congreso, permitió que los mandos tradicionales del ejército recuperasen su control sobre las fuerzas armadas, retomaran el ejecutivo republicano y comenzaran a derogar las disposiciones más avanzadas.

Los recién desplazados del poder y toda la oposición procedieron a reestructurarse. Los civiles pequeño-burgueses que habían estado en el PSG, constituyeron el Movimiento Nacionalista Revolucionario. Los trotskistas se agruparon en su Partido Obrero Revolucionario. Los militares progresistas organizaron una logia nueva, encabezados por el mayor Gualberto Villarroel. Éstos, en diciembre de 1943 realizaron un golpe de Estado, que llevó a muchos integrantes del MNR a importantes posiciones de gobierno. Luego, en las elecciones parlamentarias de 1944 este partido resultó el principal en el Congreso, y nombró a Villarroel presidente de la república. Entonces se conformó la Federación Sindical de Trabajadores Mineros, se instituyó el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, se nombró a Paz Estensoro ministro de Hacienda para que implementase un Plan de Desarrollo Económico de Bolivia, se prohibieron los servicios personales o renta en trabajo de los campesinos a los terratenientes, se celebró un Primer Congreso Indígena. Y en 1945 las nuevas disposiciones fueron integradas en una progresista Constitución. Pero el Partido de Izquierda Revolucionaria

—que se proclamaba “marxista e influía en algunos sectores proletarios— así como el POR, universitarios, y la Federación Obrera Sindical, se aunaron en 1946 con elementos aristocráticos en el mal llamado Frente Democrático Antifascista, animado por los tres periódicos de la “Rosca” u oligarquía minero-exportadora. Se gestó así una poderosa y heterogénea coalición, que respaldada por militares descontentos, asaltaron el 21 de diciembre de ese año el Palacio Presidencial y asesinaron a Villarroel.

Durante un sexenio de represión generalizada la oligarquía mantuvo de nuevo el poder. En su contra el MNR alentó insurrecciones, mientras las desacertadas y erráticas dirigencias del POR y el PIR desprestigiaban a dichos partidos. Hasta que la vanguardia de este último se escindió para fundar el Partido Comunista de Bolivia. En ese contexto se celebraron elecciones en 1951, de las cuales emergieron Víctor Paz Estensoro y su MNR como triunfadores, lo cual no fue aceptado por el presidente civil de turno, que entregó el gobierno a una Junta Militar. Entonces se produjo la rebelión del 9 de abril de 1952, llevada a cabo por los obreros de las minas. Dado que muchos de ellos eran veteranos de la Guerra del Chaco, pronto se organizaron en milicias y derrotaron al ejército en distintas batallas, en las cuales los elementos populares se vieron reforzados por el Cuerpo de Carabineros, que se les unió. Así, juntos ocuparon La Paz luego de tres días de combate. Empezaba la Revolución Boliviana. De inmediato Paz Estensoro regresó de la Argentina y ocupó la presidencia, tras lo cual el MNR organizó su propia fuerza armada —integrada por obreros milicianos y carabineros—, se aumentaron los salarios un 40 por ciento, se congelaron los alquileres y se fijaron toques a los precios de los productos de primera necesidad, se constituyó la Confederación Obrera de Bolivia o central sindical única. Esta poderosa entidad clasista exigió la nacionalización de la gran minería —que fue estatizada—, y envió mineros a los campos para auspiciar la agitación revolucionaria; en muchas zonas los indígenas aún sufrían la aparcería o eran siervos. Para calmar la incipiente efervescencia rural, en 1953 el MNR emitió una contradictoria ley de reforma agraria; aunque se formaron algunas cooperativas sobre la base de antiguas comunidades agrícolas aborígenes, el proyecto básicamente proponía distribuir pequeñas parcelas entre los desposeídos. Ni siquiera se afectaban las grandes propiedades cuyos dueños hubiesen invertido en ellas capitales, como en las plantaciones de la región de Santa Cruz. De esta forma se creó un amplio sector que tendió al autoconsumo, pues poco producía para el mercado y menos aún compraba en él.

El MNR una vez eliminadas las reminiscencias feudales, expropiada la cúpula burguesa de la minería, establecido el voto universal, reconocida la existencia legal de los idiomas quechua y aimará, consideró terminadas las transformaciones. Entonces se dedicó a contener la rebeldía obrera, mientras fortalecía su alianza con los minifundistas. Más tarde el gobierno llegó incluso a forjar un “Pacto Militar-Campesino”, en tanto desarmaba las milicias proletarias. A partir de ese momento la cúspide del MNR se enriqueció, aunque fuera mediante malversaciones o negocios sucios y peculado; anhelaba convertirse en burguesía propiamente dicha. Y sobre todo entenderse con Estados Unidos. A éstos, dicho partido entregó una parte del petróleo nacionalizado hacía más de tres lustros;

a cambio recibió una subvención anual equivalente al cuarenta por ciento del presupuesto boliviano. También por disposición estadounidense el MNR votó en 1954 a favor de la resolución anti-comunista de la OEA, que decretaba la muerte del proceso revolucionario encabezado por Árbenz en Guatemala.

Fidel Castro, descollante líder estudiantil en la Universidad de La Habana, en 1947 se enroló como soldado en el Batallón Sandino de la Legión del Caribe. Después fue promovido a jefe de pelotón y compañía. Pero al llegar la hora de zarpar hacia Santo Domingo, las fuerzas armadas de Cuba se negaron a que lo hiciera, y todos sus integrantes fueron detenidos. Menos Fidel Castro, que se tiró de la embarcación y nadó en aguas llenas de tiburones hasta el litoral. Al año, cuando se convocó a la novena Conferencia Panamericana —a celebrarse en Bogotá—, para transformar dicho cónclave en OEA, el audaz joven concibió un Primer Congreso de Estudiantes Latinoamericanos, que en la misma ciudad protestase contra los designios imperialistas. En ella, Fidel se entrevistó con el popularísimo Jorge Eliécer Gaitán, quien clausuraría en un gran acto el evento de los universitarios. Sin embargo a los dos días el político colombiano fue asesinado, lo cual engendró el 9 de abril de 1948 el “bogotazo”. Allí, aunque discrepaba de lo que sucedía, Fidel se quedó junto a los que anhelaban la revolución, dispuesto a morir en el anonimato. Más tarde, de regreso a Cuba y ya graduado en Derecho, se opuso al golpe de Estado que el 10 de marzo de 1952 realizó el ex-presidente Batista. Pero como en contra de éste los partidos políticos tradicionales nada efectivo hacían, el novel abogado decidió con sus afines iniciar una insurrección. Entonces el 26 de julio de 1953 atacaron en Santiago el Cuartel Moncada, pero fueron derrotados y los supervivientes encarcelados. Luego la movilización de las masas obligó al tirano a liberar a los “moncadistas”, quienes no obstante tuvieron que marchar al exilio en México. Allí, Fidel organizó una expedición de ochenta hombres —entre los cuales sobresalían su hermano Raúl y Ernesto “Che” Guevara—, quienes a bordo del Granma navegaron hacia las costas orientales de Cuba, donde desembarcaron el 2 de diciembre de 1956. A pesar de grandes reveses iniciales, se conformó el Ejército Rebelde que desató una trascendente lucha guerrillera, la cual en dos años venció.

El triunfo de la Revolución Cubana el 1 de enero de 1959, significó un gigantesco paso de avance en la historia de América Latina; demostró que no existían barreras infranqueables para un proceso decidido a llegar a su máximo desarrollo, en dependencia del sector social que ocupara el poder y de quienes fuesen sus dirigentes. En Cuba, tras la victoria se intervinieron las propiedades malversadas por los antiguos gobernantes, se rebajaron los alquileres para luego entregar la propiedad de los domicilios a sus inquilinos, se dictó una ley de Reforma Agraria que expropió los latifundios e hizo surgir al lado de la pequeña propiedad campesina a cooperativas y granjas estatales, se transformaron los cuarteles en escuelas, se fundaron milicias —de obreros, campesinos, estudiantes e intelectuales—, se nacionalizaron los bancos y demás compañías extranjeras, se estatizaron cuatrocientas empresas propiedad de criollos, se constituyeron en los barrios Comités de Defensa de la Revolución. Y tras el bombardeo del país por aviones mercenarios, en el entierro de las víctimas, Fidel Castro proclamó el carácter socialista de la revolución; era la víspera de una invasión que preparaba

la CIA por Playa Girón. Pero el pueblo cubano, armado, la derrotó en setenta y dos horas. Después las diferentes fuerzas revolucionarias se unificaron -con una dirección capaz, decidida y firme-, en el Partido Comunista de Cuba.

En América Latina, el triunfo de la Revolución Cubana influyó mucho en la conciencia de los más audaces; entendían que amplias perspectivas de liberación se abrían para millones de humildes y desposeídos, cuya lucha podría terminar con la opresión. Incluso, hubo quienes de inmediato se lanzaron al combate guerrillero; en Haití, enemigos del tirano “Papa Doc” Duvalier -adali de la “negritud”-; en República Dominicana, veteranos de la Legión del Caribe, deseosos de poner fin al régimen de Trujillo; en Paraguay, comunistas y “febreristas”, anhelantes de derrocar al dictador Stroessner; en Venezuela, comunistas y “miristas”, disconformes con el arbitrario presidente Rómulo Betancourt; en Colombia, las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ejército de Liberación, opuestos a los oligárquicos gobiernos del Frente Nacional; en Perú, trotskistas así como disidentes del APRA y del comunismo, que soñaban con revolucionar la arcaica sociedad; en Bolivia, Ernesto “Che” Guevara e internacionalistas cubanos, junto con escindidos del PCB, con la intención de rescatar el proceso transformador iniciado por los mineros, que el MNR había frustrado.

También surgió entonces el nacionalismo revolucionario entre los militares, que deseaban hacer más democráticas y justas sus respectivas repúblicas. Sucedió así con Francisco Caamaño en Dominicana, quien derrotó en 1965 los intentos de restablecer el trujillismo, y como presidente combatió la invasión estadounidense opuesta al constitucionalismo. En Panamá, Omar Torrijos y los oficiales que censuraban la represión a quienes protestaban por la presencia de Estados Unidos en la Zona del Canal. Por ello, en 1968 tomaron el poder y con éxito reivindicaron la soberanía nacional sobre la estratégica vía interoceánica.

En Perú, Juan Velasco Alvarado instituyó en octubre de 1968 el gobierno de la Fuerza Armada, y llamó a la ciudadanía a rescatar la dignidad nacional “violada por el imperialismo”. De inmediato el ejército ocupó los yacimientos petrolíferos de La Brea y Pariñas, y sin pago alguno los revirtió al patrimonio estatal. Se iniciaba así el cumplimiento del llamado Plan Inca, diseñado por los generales “cholos” (mestizos) para revolucionar la sociedad. Después se dictó una radicalísima ley de reforma agraria, que terminó con la injusta tenencia de tierra mientras preservaba la integridad de las grandes unidades productivas, convertidas en cooperativas. Luego se expropiaron los consorcios norteamericanos. Éstos fueron integrados al pujante capitalismo de Estado, que llevaba a cabo más del 50 por ciento de las inversiones en el país; había medio centenar de importantes empresas totalmente públicas en actividades de petróleo, hierro, electricidad, siderurgia, ferrocarriles, comunicaciones, aviación. Y otras cien tenían participación estatal sobre la mitad de su propiedad. La banca y el comercio exterior tampoco escaparon al dominio del Estado.

Las transformaciones nacionalistas trascendieron el carácter democrático y burgués, cuando en mayo de 1974 Velasco Alvarado anunció nuevas leyes sobre la propiedad. Uno de dichos decretos reestructuraba la economía y convertía al Estado en su pivote principal, preservando bajo su control los servicios básicos y las mayores industrias. Otro decreto, sobre la prensa, entregaba los diez

principales periódicos a diversos sectores laborales del país. Esas disposiciones traspasaban los límites de lo tolerable para la burguesía, que entonces se incorporó al campo de la oposición. Frente a ese reaccionario peligro, los proclives al progreso se encontraban divididos. No existía una fuerza política común que los aglutinara, ni tampoco los asalariados estaban unificados en una organización sindical. Y el poder seguía siendo militar, con la verticalidad jerárquica tradicional de las fuerzas armadas cuyos efectivos no habían sido depurados; sólo en la cúspide había un grupo de radicales “generales cholos” decididos a revolucionar la sociedad. En esas circunstancias el general Juan Velasco Alvarado enfermó de gravedad. Entonces grupos moderados de la oficialidad llevaron a cabo un sutil golpe de Estado, desplazaron a sus colegas de izquierda, eliminaron cualquier limitación al “gran capital”, frenaron la reforma agraria —en seis años se habían repartido siete millones de hectáreas—, re-privatizaron muchas empresas, derogaron el novedoso estatuto de la prensa, reprimieron protestas obreras.

En Chile hacia 1970, la industria transformadora producía la cuarta parte del producto bruto nacional, y por su importancia económica se situaba inmediatamente detrás del cobre. En esa época, la burguesía nacional chilena dejaba de existir ante el vigoroso empuje de los emergentes monopolios criollos. Además, los gobiernos de turno imprimían al capitalismo de Estado un rumbo acorde con los deseos del sector monopolista. Sin embargo en el país existía todavía una importante burguesía media, cuyos treinta y dos mil establecimientos recibían poco menos de un tercio de las mencionadas ganancias, y había también unos veintidós mil pequeños propietarios que a duras penas alcanzaban el 4 por ciento de los referidos beneficios. El resto de la población estaba compuesta en un 45 por ciento de proletarios. La agricultura aportaba un escaso 10 por ciento al producto nacional bruto, y el 73 por ciento de las tierras pertenecían a sólo tres mil trescientos propietarios.

El revolucionario programa electoral de la Unidad Popular con Salvador Allende al frente, aportaba una concepción novedosa sobre la transformación de la sociedad, pues proponía el surgimiento de tres áreas de propiedad bien diferenciadas: la social, la mixta y la privada. En la primera se englobarían las empresas estatales de la Corporación de Fomento así como todos los monopolios criollos y extranjeros que fuesen nacionalizados, además de las riquezas básicas y el comercio exterior. Esto significaba estatizar monopolios y transnacionales, que por sí solos producían el 50 por ciento del producto global bruto. Los sectores donde operaba la burguesía media serían considerados como “mixtos”, pues en ellos también podrían funcionar dependencias del Estado. En cambio el “área privada” de la economía sería de la exclusiva competencia de los pequeño-burgueses. El proyecto político de la UP contemplaba también acelerar la reforma agraria, afectando las grandes propiedades particulares con el propósito de establecer sobre ellas formas cooperativas de producción, y a la vez reorganizar a los minifundistas y defender las comunidades indígenas mapuches. Con ese programa electoral Salvador Allende ocupó la presidencia el 4 de noviembre de 1970.

De inmediato se expropiaron trescientos cincuenta grandes latifundios que abarcaban tres millones y medio de hectáreas, se amplió el área de propiedad

social, se nacionalizó todo el cobre –que producía el 10 por ciento del producto nacional bruto y obtenía las tres cuartas partes de las divisas-, y se logró un 12 por ciento de crecimiento industrial en el primer año de la nueva gestión gubernamental. Pero entonces un bloqueo silencioso fue iniciado por Estados Unidos contra Chile. A la vez, en el Congreso Chileno la derecha impedía que se aprobara la ley de las tres áreas de la economía; se acusaba al presidente de actuar por encima de la legalidad y querer estatizarlo todo.

En los comicios parciales de marzo de 1973 la Unidad Popular obtuvo el 44 por ciento de los votos, esto convenció a muchos en el ejército de que los procedimientos constitucionales no servirían para detener el proceso de transitar a otra sociedad. Por ello los más apresurados generales-traidores promovieron que unidades blindadas del regimiento Tacna llevaran a cabo un fallido intento de golpe militar. A pesar de esto, el gobierno insistió en dejar incólume los mandos y estructuras de las fuerzas armadas. Entonces toda la reacción se sintió segura y pasó a la ofensiva; fue asesinado el edecán presidencial, se obligó a renunciar al jefe constitucionalista del ejército. Hasta que el 11 de septiembre de 1973 se produjo el ataque al Palacio de la Moneda, donde el presidente Salvador Allende murió con un arma en las manos. Se evidenció así que la Unidad Popular no tenía un plan de lucha para defender a su gobierno, lo cual posibilitó la rápida victoria de los conjurados. Luego tuvo lugar la más brutal y sangrienta represión.

En América Latina, una segunda oleada revolucionaria comenzó el 19 de julio de 1979, con el triunfo armado en Nicaragua del Frente Sandinista de Liberación Nacional. En este país centroamericano la burguesía estaba dividida en tres grupos económicos bien diferenciados. Uno estaba representado por el Partido Conservador, integrado por ganaderos, comerciantes, productores de azúcar y bebidas alcohólicas de la región de Granada. Aún más poderosos eran los algodoneros y comerciantes liberales de León y Chinandega, aliados con los industriales de Managua. El tercer grupo estaba dirigido por la gobernante familia Somoza. Los tres grupos mencionados no eran compartimentos estancos; entre ellos existían diversos nexos, como el de la compañía común para exportar azúcar.

El gobierno sandinista presidido por Daniel Ortega, nacionalizó el comercio exterior y el sistema bancario; estableció una política tributaria nueva, que descontaba a los burgueses el cuarenta por ciento de sus ganancias; impulsó la reforma agraria. Ésta expropió el treinta y un por ciento de todas las tierras del país, –fuesen de los Somoza y su grupo, u ociosas o abandonadas-, las cuales fueron distribuidas en parcelas, agrupadas en cooperativas o estatizadas. Con los intereses nacionalizados se constituyó el área de propiedad del Pueblo, que en 1982 aportaba ya el 40,8 por ciento del Producto Interno Bruto. Así, a pesar de que el sector privado era mayoritario en la economía nicaragüense, el estatal se había convertido en una pieza clave de ésta, pues regulaba la actividad productiva, la distribución y la inversionista. El Estado revolucionario también reorientaba el comercio exterior; decaía el intercambio con Estados Unidos mientras aumentaban los vínculos con el resto de América Latina y con los países socialistas.

La mejoría económica experimentada por Nicaragua pronto se vio afectada por la agresividad imperialista; el presidente de Estados Unidos –Ronald Reagan– ordenó que la CIA minara puertos y saboteara industrias, estableció bases norteamericanas en la vecina Honduras, engendró bandas mercenarias que incursionaban dentro del país asesinando gentes y asolando bienes, en un proceso injerencista incluso prohibido por el Congreso estadounidense, que al ser burlado por el ejecutivo dio lugar al escándalo llamado “Irán-contras”. En dicho conflicto, el relativo equilibrio alcanzado entre las partes condujo en febrero de 1987 a un acuerdo de cese al fuego; éste dispuso el desarme de las fuerzas irregulares, la suspensión de toda ayuda militar extra-regional, la reconciliación nacional. Esta solución implicaba una acrecentada lucha política pero no militar, y permitía la supervivencia del proceso nicaragüense pues no pedía renunciar a la soberanía nacional ni a la autodeterminación del país. También se convocó a una Constituyente, la cual implantó el pluralismo político, tripartición de poderes, economía mixta, sexenios presidenciales, comicios generales a principios de 1990. En ellos se produjo la sorprendente victoria de la Unión Nacional Opositora, que una vez en el gobierno redujo el ejército y suprimió el Servicio Militar Obligatorio; desmanteló el Área de propiedad del Pueblo pues las propiedades que habían sido nacionalizadas, las privatizó en un proceso conocido como “La Piñata”, por la arrebatiña que engendró. Surgieron así, en lugar de las trescientas compañías estatales antes existentes, una multitud de pequeñas empresas privadas.

En Venezuela, el 27 de febrero de 1989, se produjo un colosal estallido de violencia popular conocido como “El Caracazo”. Las masas, que protestaban contra el gobierno por su programa neoliberal de ajuste, fueron reprimidas por las fuerzas armadas. Esto engendró en el ejército una tendencia opositora llamada Movimiento Bolivariano Revolucionario, encabezado por Hugo Chávez. Éste, luego de una fallida sublevación, se nutrió del MBR y de civiles revolucionarios para conformar un Movimiento por la Quinta República, que prometió una Constituyente en caso de ganar las elecciones. A principios de 1999 Chávez ocupó la presidencia y convocó a elaborar otra constitución, que tras ser aprobada por el 72 por ciento de los votantes, estableció un poder ejecutivo fortalecido, mayor control estatal sobre la economía y los medios de comunicación, y un legislativo unicameral. Reelecto en el 2000, Chávez llamó a realizar profundas transformaciones socio-económicas y políticas, entre las que se encontraban leyes de Tierras y Desarrollo Agrario –que permitía expropiar latifundios–, y de Hidrocarburos. Ésta fijaba en 51 por ciento la participación estatal, y gravaba con un impuesto del 30 por ciento las utilidades de los extranjeros en dicho rubro. El disgusto reaccionario condujo a un intento de golpe cívico-militar en abril del 2002. Pero el pueblo se lanzó a las calles exigiendo la excarcelación del presidente, lo cual junto a la acción de los militares institucionalistas, lo restablecieron en el ejecutivo. Chávez entonces clamó por una sociedad “rumbo al socialismo del siglo XXI”. Electo de nuevo en el 2006, anunció que mejoraría la distribución de riquezas mediante mayor poder popular, una economía favorable al colectivismo y mucha justicia social.

En el ámbito de su política latinoamericanista, el presidente Chávez propuso

la Alianza Bolivariana para América Latina y el Caribe, como una forma novedosa y justa de asociación que rechazaba la rivalidad o competencia económica; auspiciaba la complementariedad productiva e impulsaba un comercio avalado por una acertada práctica inversionista, que propiciaba la interconexión energética y de las comunicaciones. Pronto el ALBA, además de Venezuela y Cuba, estuvo integrado por Nicaragua –de nuevo sandinista- así como por Bolivia, Ecuador, Dominica, San Vicente y Las Granadinas, Antigua, Barbuda. Esta asociación funge como plataforma de poder de la nueva izquierda latino-caribeña, con espíritu democrático y flexible, que se adapta al contexto propio de cada país. El ALBA creó su propio Banco, junto al cual surgió el Sistema Único de Compensación Regional, con una moneda virtual –el SUCRE- que no recurre a divisa extranjera alguna. El conjunto de esos factores propició el surgimiento de Empresas Gran-nacionales, cuyo desempeño colectivo beneficia a sus integrantes.

La creación del ALBA tuvo lugar cuando en América Latina las luchas populares habían derrotado las tiranías militares-fascistas y realizado el tránsito a la democracia. Entonces surgió el MERCOSUR, que unió las economías de cuatro países sudamericanos, cuyos gobiernos fueron paulatinamente ocupados por fuerzas progresistas. En Argentina, el Frente para la Victoria, con las sucesivas presidencias de los esposos Kirchner; el Brasil, conducido por el Partido Trabalhista, cuyo reelecto presidente Luiz Ignacio Lula da Silva auspició la exitosa candidatura de la ex-guerrillera Dilma Rousseff; Uruguay, donde el Frente Amplio –tras un lustro de gobierno- se consolidó con la elección del ex-Tupamaro y expreso político José “El Pepe” Mujica; Paraguay, en el cual la Alianza Patriótica para el Cambio logró la victoria electoral del radical ex-obispo –dispensado del cargo por el Papa- Fernando Lugo.

El Pacto Andino tuvo una evolución semejante, pues también figuras opuestas al neoliberalismo y proclives a la transformación social, fueron electas para la presidencia en tres de sus cuatro repúblicas. En Bolivia, el Movimiento Al Socialismo –encabezado por el aymará Evo Morales- ocupó el poder y emitió una progresista Constitución refrendada por el voto popular. En Ecuador el carismático Rafael Correa, al frente de su Alianza País –abreviación de Patria Altiva y Soberana- ganó las elecciones y convocó a una Constituyente, cuyo avanzado texto fue aprobado por la mayoría de la población. En Perú, el nacionalista ex-oficial rebelde Ollanta Humala triunfó en los comicios con la promesa de una mayor participación en el proceso integracionista. Éste se expresaba en la recién conformada Unión de Naciones Sudamericanas –UNASUR-, y sobre todo en la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe –CELAC- instituida en el año 2011, sin participación alguna de cualquier país ajeno a la región. Se hizo así realidad el bicentenario anhelo de integración latinoamericanista.